



Proceso	Verbal
Demandante	John Jairo Maya Salazar y otros
Demandado	Gloria Cecilia Baena Osorio y Otros.
Radicado	05001 31 03 018 2021 00282 01
Procedencia	Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Medellín
Instancia	Segunda
Ponente	Juan Carlos Sosa Londoño
Asunto	Auto No. 065
Decisión	Revoca
Tema	Excesivo ritualismo
subtema	<p>No es de difícil ocurrencia que un pasajero lesionado en accidente de tránsito demande en acción de responsabilidad civil contractual a la empresa afiliadora y en acción directa a la compañía aseguradora con fundamento en la póliza de respsoabilidad civil contractual, pero al mismo tiempo, el ejercicio de la acción de responsabilidad extracontractual en contra el propietario conductor, empresa afiliadora y compañía de seguros del otro vehículo involucrado en el accidente. Según la tesis que pregona el <i>a quo</i>, está obligado el demandado a solicitar medidas cautelares frente a todos ellos, so pena de inadmisión de la demanda y eventual rechazo por falta del requisito de procedibilidad, lo que constituye, como lo hizo el juez, interpretación que lesiona el principio <i>pro actione</i>, esto es, obstaculiza de manera injustificada el derecho de los actores a que la jurisdicción ordinaria conozca y resuelva sobre las pretensiones a ella sometidas</p> <p>Vistas así las cosas, se tiene que proceder de la forma como lo hizo el <i>a quo</i>, es olvidar la esencia de los procedimientos, pero además, claro ejemplo del adagio latino "<i>summus jus, summa injuria</i>", pues de esa manera se lesionó el derecho de acceso a la administración de justicia de los demandantes, se itera, el respeto por las formas propias de cada juicio no implica, en manera alguna que los ritos</p>

	procesales sean un fin en sí mismos, todo lo contrario, la primacía de lo sustancial, impone que los procedimientos sirvan como medio para lograr la efectividad de la administración de justicia y de los derechos subjetivos de quienes someten sus conflictos a ella.
--	--

TRIBUNAL SUPERIOR

2021-077

SALA UNITARIA CIVIL DE DECISIÓN

Medellín, ocho (8) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

Procede la Sala a decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante frente al auto del 9 de agosto de 2021, proferido por el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Medellín, que rechazó la demanda verbal presentada por John Jairo Maya Salazar y otros, contra Gloria Cecilia Baena Osorio y Emmanuel Osorio Baena.

I. ANTECEDENTES

1. Correspondió por reparto al Juzgado Dieciocho Civil del Circuito Medellín, la presente demanda verbal en la cual se pretendió que se declare civil y solidariamente responsables a los demandados Gloria Cecilia Baena de Osorio y Emmanuel Osorio Baena, como presuntos responsables de los daños causados a los demandantes, como consecuencia del accidente ocurrido el 30 de enero de 2019 en la Calle 44 No 81 – 79 de la ciudad de Medellín, y consecuentemente se les condene a pagar los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados.

2. Por auto del 25 de julio pasado, el juez de conocimiento inadmitió la demanda y concedió a la parte actora el término de 5 días para subsanarla, so pena de rechazo, para lo cual exigió:

“... 1. Con fundamento en lo establecido en el numeral 7º del artículo 90 del C. G. del Proceso, en concordancia con el artículo 38 de la Ley 640 de 2001, la parte actora deberá acreditar que agotó el requisito de procedibilidad en nombre de todos y cada uno de los demandantes frente a todos y cada uno de los demandados.

Luego, si las medidas cautelares solo comprometen bienes de la codemandada Gloria Cecilia Baena de Osorio no es posible pretender que se extiendan sus efectos para obviar el requisito de procedibilidad, conforme a lo indicado por el parágrafo 1ro del artículo 590 ib, el cual es una condición previa para instaurar demanda, tal como lo exige la Ley 640 de 2001. En dicha medida, si no se están pidiendo medidas cautelares sobre bienes del demandado Emmanuel Osorio Baena, el aludido requisito frente a este no se puede considerar como superado.

2. Siguiendo lo prescrito por el numeral 5º del artículo 82 ibíd., para satisfacer el presupuesto procesal de demanda en forma, el libelo genitor deberá expresar “Los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados”, por esta razón:

a. Deberá complementar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ocurrencia del accidente de tránsito

b. En los hechos de la demanda se deben describir los supuestos fácticos que han generado un daño y el consecuente perjuicio, procediendo a delimitarlos objetivamente, tanto los patrimoniales como lo extrapatrimoniales, sin que fuera plausible realizar operaciones de cuantificación en el acápite de peticiones, verbi gratia, lucro cesante pasado y futuro, ya que no es pertinente de cara a la técnica de la demanda. Para esto resulta importante citar en los hechos de la demanda, la fuente de los ingresos económicos de la víctima directa, con relación a la prueba correspondiente. Así mismo, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, deberá explicar cuáles son los hechos que fundamentan los perjuicios extrapatrimoniales que se vienen pretendiendo, siendo insuficiente lo relatado en el cuerpo de la demanda. La parte demandante deberá presentar nuevamente un escrito de la demanda en el cual se aprecien integradas todas y cada una de las exigencias realizadas, para efectos de claridad frente a la futura contraparte.”

3. El apoderado de la parte demandante allegó escrito pretendiendo subsanar los requisitos exigidos, a lo que el juez de instancia consideró no haberse subsanado en debida forma y procedió al rechazo de la demanda, para lo cual adujo:

“...i) Respecto del codemandado Emmanuel Osorio Baena, requisito que es indispensable por tratarse de la forma como se ha delimitado por el Legislador Procesal el acceso a la administración de Justicia, siguiendo las prescripciones contempladas en la Ley 640 de 2001, siendo necesario precisar: Que ante la ausencia del requisito de procedibilidad frente al señor Osorio Baena, es importante aclarar que cada uno de los demandados son autónomos e independientes frente a las pretensiones y están llamados a responder individual o solidariamente por la totalidad de lo reclamado.

Desde esta perspectiva, siendo litisconsortes facultativos y no necesarios, no es posible que, con una sola medida cautelar que afecta solo al patrimonio de uno de los codemandados, dirigida a la inscripción de la demanda en los folios de matrículas inmobiliarias Nos. 001-569735 y 001- 569738 de propiedad de la señora Gloria Cecilia Baena de Osorio, se pueda suplir el requisito exigible frente al otro pasivo, quien como se dijo, responde individualmente frente a las pretensiones de la demanda, debiendo la parte actora agotar la audiencia de conciliación como requisito de procedibilidad frente al restante grupo de listiconsortes facultativos, conforme lo dispone el artículo 38 de la Ley 640 de 2001, modificado por el artículo 621 del C. G. del Proceso.

Ahora, es cierto que el párrafo del Art. 590 del C.G.P., alude a que, “En todo proceso y ante cualquier jurisdicción, cuando se solicite la práctica de medidas cautelares se podrá acudir directamente al juez, sin necesidad de agotar conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad”, lo cual, dentro del contexto del caso presente, reclama que frente a cada uno de los demandados, litisconsortes facultativos, se pidan medidas cautelares que comprometan su patrimonio y se constituya en garantía de una eventual sentencia condenatoria. No es plausible que, con una sola medida cautelar, no siendo este el caso de un litisconsorcio necesario, se pretendan extender sus efectos para comprometer a la comunidad de cara a que la parte actora se vea excluida del deber de agotar el requisito de procedibilidad.

En cuanto al fundamento normativo que reclama el apoderado de la parte Demandada, pregonando una interpretación sistemática y no insular o aislada del Art. 590 del C.G.P., bien puede observarse como en el Art. 60 ib, nos dice que, “Salvo disposición en contrario los litis consortes facultativos serán considerados en sus relaciones con la

contraparte, como litigantes separados. Los actos de cada uno de ellos no redundarán en provecho ni en perjuicio de los otros, sin que por ello se afecte la unidad del proceso”.

Luego, como la demanda contiene una acumulación de pretensiones frente a varios sujetos que, por su relación entre ellos y los demandantes, se los puede calificar normativamente como litisconsortes facultativos, y como la misma debe considerarse como “litigantes separados”, por esta razón, la medida cautelar que, respecto de uno de los demandados se pida, no repercute en nada frente al otro, razón por la cual, se hace necesario insistir en que se debe o solicitar una cautela frente a él, o agotar el requisito de procedibilidad.

No se trata de un requisito caprichoso, como pareciera entenderlo nuestro respetable interlocutor. ii) De otro lado, dentro la estructura de la pretensión de responsabilidad civil extracontractual, son elementos basales o fundamentales, la determinación de un hecho con trascendencia jurídica, la relación de causalidad, el daño y la prueba del perjuicio, teniendo en cuenta que la culpa se presume.

Ahora, es indispensable para realizar un adecuado juicio retrospectivo sobre la relación de causalidad que, en los hechos de la demanda se presenten los datos objetivos que permitan determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurre el evento dañino cómo, por ejemplo: Condiciones climáticas, visibilidad u obstáculos que la nugaran o redujeran, estado de la vía, sentido en que se movilizaba el vehículo y el transeúnte, lugar del impacto, si sobre la vía, sobre la berma, sobre la acera, estado del conductor, velocidad del desplazamiento, etc, etc.

De otro lado, en los hechos de la demanda deben de aparecer claramente los datos objetivos que permitirán realizar la estimación del perjuicio por lucro cesante.

El acápite de hechos es diferente al del juramento estimatorio, ambos tienen y cumplen finalidades diferentes en la estructura y técnica de la demanda, tal como lo exige el artículo del C. G. del Proceso.

Omitir describir en los hechos de la demanda cuáles son los referentes probáticos del perjuicio por lucro cesante, afecta seriamente la pretensión encaminada a probarla. El juramento estimatorio tiene la finalidad de establecer el perjuicio material en caso de que la parte actora no lo objete. Objetado, la pretensión queda asida a lo que se pruebe con referencia a los hechos que la soportan.

Al punto, el Togado no dio cumplimiento a lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 2º del auto inadmisorio, pues, se limitó a manifestar su discrepancia frente a los requisitos exigidos, omitiendo delimitar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos

que dan base a la acción indemnizatoria y, mucho menos, a complementar la fuente de los ingresos percibidos por la víctima directa, lo cual no es una exigencia caprichosa o sin fundamento del Despacho, pues, será con fundamento en los hechos debidamente narrados de lo que el extremo pasivo debe defenderse, sin que se pueda dar lugar a hechos sorprendidos en el discurrir del pleito, ello, de conformidad a lo establecido en el numeral 5º del citado artículo 82 ibídem, tal y como se le indicó en el auto inadmisorio de la demanda. Incluso, para acudir a las presunciones de hecho y legales, la parte actora debe determinar los hechos que la fundamentan y exponer, claramente, cuál es el hecho presumido...”

4. Frente a esta decisión el demandante interpuso recurso de apelación en los siguientes términos:

“...En primer lugar habremos de advertir que el concepto de parte en el sentido amplio hace referencia a quien es demandante y quien es demandado, que, a su vez, cada extremo puede estar conformado por varias personas naturales o jurídicas. En el caso concreto la parte pasiva la conforman GLORIA CECILIA BAENA DE OSORIO y EMMANUEL OSORIO BAENA . Ahora bien, el párrafo primero del Artículo 590 del C.G.P señala lo siguiente: “En todo proceso y ante cualquier jurisdicción, cuando se solicite la práctica de medidas cautelares se podrá acudir directamente al juez, sin necesidad de agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad....

Nótese, como la norma no condiciona de ninguna manera, que, si se solicita la medida cautelar respecto de una de las personas que conforman la parte pasiva, debe agotarse la conciliación respecto de la otra, por lo que evidentemente el despacho hace una interpretación extensiva e indebida de la misma También valga la pena advertir que ni en el Artículo 590 párrafo primero del C.G.P ni en el Artículo 6 de Decreto 806 de 2020, se encuentra la manifestación expresa de que la solicitud de medidas cautelares deberá hacerse con respecto a todos los demandados, no se tiene ningún Decreto, Resolución, Ley o sustento jurisprudencial en la que se indique que la parte actora debe solicitar la práctica de medidas cautelares ante todos los demandados, por lo que se realizó un rechazo de la demanda de manera infundada violentando el debido proceso y acceso a la administración de justicia que deben rituar todas actuaciones judiciales

Frente a lo anterior manifiesto que no puede caerse en la inquisición de algunos despachos judiciales que al no realizar una redacción como ellos suponen o desean debe hacerse encuentran más fácil inadmitir y luego rechazar una demanda en situaciones que hacen más gravosa la administración de justicia y que estimula la desigualdad procesal y material entre los asociados.

En cuanto a la fuente de los ingresos económicos de la víctima directa y que no se indica en la demanda, basta con revisar la demanda en el hecho octavo donde se indica que el señor JHON JAIRO MAYA SALAZAR era vendedor, con relación a la prueba correspondiente, se ha indicado suficientemente que era un vendedor y que generaba ingresos por un salario mínimo, En cuanto a la fuente de los ingresos económicos de la víctima directa y que no se indica en la demanda, basta con revisar la demanda en el hecho octavo donde se indica que el señor JHON JAIRO MAYA SALAZAR era vendedor, con relación a la prueba correspondiente, se ha indicado suficientemente que era un vendedor y que generaba ingresos por un salario mínimo,

Lo que advierte es que en caso de no lograrse demostrar el quantum del daño se aplicara conforme a los criterios de equidad (Ley 446 de 1998) en este caso el salario mínimo, pues existe presunción de que una persona productiva no puede ganar menos del salario mínimo y por lo tanto y al haber solicitado y realizado los diferentes cálculos con base en dicho rubro será menester del juzgado acatar este valor y en caso de resultar probado el daño se liquidara con base en este valor, pues no se nos debe olvidar que al demandarse la responsabilidad civil extracontractual derivada del ejercicio de actividades peligrosas los demandantes gozan de presunción de responsabilidad y por lo tanto los demandados se presumen en culpa, razón por la cual solo deben demostrar el daño y su cuantía, elemento este último que como se dijo goza de presunción de que personas productivas en Colombia no ganan menos del salario mínimo.

Es por ello que este requisito exigido por el despacho es un requisito propio del debate probatorio y será luego de situarse el mismo que el juez determinará si se cumplió con la carga de demostrar el daño y su cuantía, mal haría en legitimarse una situación diferente, dejando a la arbitrariedad de los despachos y sus funcionarios de crear nuevos requisitos que no están consagrados en la Ley.

II. CONSIDERACIONES

1 El asunto que ahora concita la atención de la Sala es manifestación de la clásica contradicción entre la aplicación de la ley de manera estricta, el formalismo por llamarlo de alguna manera y la prevalencia de derechos sustanciales, de la realidad sobre la forma, el antiformalismo, tal y como lo sostuvo este

Magistrado en época pretérita¹, y no se trata de un asunto que haya tenido venero en el artículo 228 de la Constitución como suele creerse. En efecto, el artículo 472 de la ley 105 de 1931, más conocido como Código Judicial, sabiamente consagraba:

“Los funcionarios del orden judicial, al proferir sus decisiones, deben tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva, y por consiguiente, con este criterio han de interpretarse las disposiciones procedimentales y las relativas a las pruebas de los hechos que se aduzcan como fundamento del derecho”.

En vigencia de esta disposición, la Corte Suprema de Justicia en los años 1937 y 1938, sí, aquella que produjo en el país un giro antiformalista, profiriendo sentencias que dinamizaron la estática de la norma escrita y cuyas decisiones más relevantes fueron incluso la génesis de nuevas normas jurídicas, se expresó así:

“Como el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la leyes sustantivas, según lo enseña el art. 472 del C.J., con este criterio no solo han de interpretarse las normas procesales y probatorias conforme lo prescribe tal artículo, sino que también las súplicas del demandante y las defensas del demandado. Conocida claramente la intención de los litigantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Los jueces han de buscar el verdadero sentido de las pretensiones expuestas por las partes, aunque tengan que desatender el tenor literal de aquellas piezas cuando traicionan la intención inequívoca de quienes litigan. Si no fuera así, un peligroso criterio textualista sacrificaría el espíritu a la letra y el derecho a la fórmula” (Cas. 18 de noviembre de 1937, XLV,844; 16 de noviembre 1951, LXX,795) – subrayas intencionales -.

2. El legislador de 1970 no olvidó tan sabia directriz del C. Judicial, de ahí el contenido del artículo 4º del decreto 1400, Código de Procedimiento Civil y nuevamente plasmado por el

¹ Aclaración de voto. Nro 5. Medellín, 13 de abril de 2007. Ordinario de GASPAR ALEMANY FERRER contra BEATRIZ ELENA y MARISOL PARRA CARDONA. M.P. MARÍA E. PUERTA M. Rdo. 05360 31 002 2004 00187 01

Constituyente en el artículo 228 de la Carta Política, que si bien no tiene la entidad suficiente de eliminar la requisitoria mínima de los escritos mediante los cuales se acude a los tribunales, la que se cumple una vez se acató la exigencia inadmisoria, como se verá a continuación, sin que sobre señalar que el artículo 11 del C. General del proceso, insiste en que: *“Al interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial.”*.

3. La iniciación del proceso civil, en virtud del derecho de acción, se realiza a través de la demanda, como instrumento previsto por la ley para garantizar, con el cumplimiento de los requisitos señalados en ella, que el proceso podrá adelantarse sin que culmine luego, por ineptitud de esta con una sentencia inhibitoria. Es por ello, que la demanda debe ajustarse a determinados requisitos establecidos de manera general en el artículo 82 del Código General del Proceso, y específicamente para algunos tipos de procesos en el artículo 83 ibídem.

La exigencia de estos requisitos encuentra su razón de ser, al considerarse que la demanda es un acto de postulación, a través del cual la persona que la impetra, ejercita un derecho frente al Estado, pone en funcionamiento el aparato judicial y propicia, la iniciación de una relación procesal.

En consecuencia, si la demanda cumple con las formalidades que la ley establece, deberá ser aceptada, de lo contrario será inadmitida para que sea subsanada dentro del término de cinco (5) días o ser rechazada, tal y como lo prevé el artículo 90 ib.,

pues el rechazo de la demanda impone al juez la obligación de verificar si las formalidades previstas por el legislador han sido satisfechas al momento de ejercer el derecho de acción.

4. Es así como consagra el artículo 90 del Código General del Proceso los requisitos que debe contener toda demanda, en lo pertinente:

"Mediante auto no susceptible de recursos el juez declarará inadmisibile la demanda sólo en los siguientes casos:

- 1. Cuando no reúna los requisitos formales.*
 - 2. Cuando no se acompañen los anexos ordenados por la ley.*
 - 3. Cuando las pretensiones acumuladas no reúnan los requisitos legales.*
 - 4. Cuando el demandante sea incapaz y no actúe por conducto de su representante.*
 - 5. Cuando quien formule la demanda carezca de derecho de postulación para adelantar el respectivo proceso.*
 - 6. Cuando no contenga el juramento estimatorio, siendo necesario.*
 - 7. Cuando no se acredite que se agotó la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad.*
 - 8. En estos casos el juez señalará con precisión los defectos de que adolezca la demanda, para que el demandante los subsane en el término de cinco (5) días, so pena de rechazo.*
- Vencido el término para subsanarla el juez decidirá si la admite o la rechaza."*

La norma es específica al establecer "sólo en los siguientes casos", es decir, que las causales son de naturaleza restrictiva pues lo que quiso el legislador con el nuevo estatuto procesal, fue garantizar la tutela judicial efectiva, esto es, que el ciudadano pudiera acudir sin ninguna traba ante el juez para resolver los conflictos intersubjetivos de intereses.

5. Sobre el tema dijo la Corte Constitucional en Sentencia C-833 de 2002 se pronunció:

"No obstante, la Corte se aparta del concepto emitido por el demandante, por cuanto la interpretación que se le da al artículo acusado, en ningún momento desconoce los derechos constitucionales

de quien acude a un estrado judicial, tampoco puede decirse que el juez que tiene a su conocimiento la demanda, puede inadmitirla bajo criterios puramente subjetivos, pues las causales de inadmisión son taxativas, se encuentran específicamente señalizadas en el precepto demandado y no le es posible a un juez inadmitir una demanda, sin que el auto que ordena la inadmisión sea debidamente fundamentado, tan es así que fue el propio legislador quien en su obligación de ejecutar el mandato social, contenido en la Constitución, estableció para los funcionarios judiciales el deber de respetar, garantizar y salvaguardar los derechos de quienes intervienen en el proceso (artículo 9 ley 270 de 1996)”

6. El *a quo* inadmite la demanda exigiendo varios requisitos, algunos de ellos bajo criterios puramente subjetivos, procediendo el apoderado de los actores a cumplir una a una tales exigencias, siguiendo las directrices trazadas por el juez en auto inadmisorio, lo que en su criterio, no colmaba su requisitoria, pues dijo que conforme al requisito de procedibilidad no se cumplió, pues afirmó que debían perseguirse bienes del otro codemandado, o en su defecto agotar el requisito de conciliación extrajudicial, por considerar que se trataba de un litisconsorte facultativo, y que por ello debían solicitarse medidas cautelares de todos y cada uno de los demandados.

7. El artículo 35 de la Ley 640 de 2001 establece como requisito de procedibilidad para acceder a la jurisdicción en los asuntos civiles, de familia y contencioso administrativo la conciliación extrajudicial y el artículo 36 siguiente, establece el rechazo de la demanda si no se cumple con tal exigencia.

Ahora, con la reforma introducida en la Ley 564 de 2012, el parágrafo 1º del artículo 590 estableció que cuando se solicite la práctica de medidas cautelares se podría acudir directamente al

juez sin necesidad de agotar la conciliación como requisito de procedibilidad.

El apoderado de la parte demandante solicitó como medida cautelar la inscripción de la demanda sobre dos bienes inmuebles distinguidos con matrículas inmobiliarias Nros. 001-569735 y 001-569738 de propiedad de la codemandada Gloria Cecilia Baena de Osorio, acudiendo de esta forma de manera directa a la jurisdicción, esto es, sin que fuese necesario agotar la conciliación prejudicial.

Ahora bien, el citado artículo 590, del Código General del Proceso, vigente a partir del 1 de octubre de 2012, dispone, en su parte pertinente, esto es en lo tocante a las cautelas que puedan deprecarse desde la presentación del libelo genitor:

“Medidas cautelares en procesos declarativos. En los procesos declarativos se aplicarán las siguientes reglas para la solicitud, decreto, práctica, modificación, sustitución o revocatoria de las medidas cautelares:

1. Desde la presentación de la demanda, a petición del demandante, el juez podrá decretar las siguientes medidas cautelares:

a) La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro y el secuestro de los demás cuando la demanda verse sobre dominio u otro derecho real principal, directamente o como consecuencia de una pretensión distinta o en subsidio de otra, o sobre una universalidad de bienes.

Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de éste el juez ordenará el secuestro de los bienes objeto del proceso.

b) La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del demandado, cuando en el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual.

Se trata de un proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual, en el que se dirige la demanda contra el

propietario y conductor del vehículo, y por tanto, como la norma lo indica, procede la inscripción de la demanda sobre los bienes de aquellos. Está claro que²:

“..la víctima puede optar por demandar a uno y otro conductor o propietario de los vehículos accidentados, o a ambos si así lo desea, a fin de que respondan de los perjuicios que haya padecido, a quienes el artículo 2344 del C. Civil les impone la solidaridad legal, “por la cual se ata a varias personas cuando todas ellas concurran a la realización del daño, sin importar la causa eficiente por las que se les vincula como civilmente responsables, solidaridad legal que se presenta ante la concurrencia de varios sujetos que deben responder civilmente frente a la misma víctima por los daños que a ésta le han irrogado, tiene por único objeto garantizarle a ella la reparación íntegra de los perjuicios; es en tal virtud que le otorga la posibilidad de reclamar de todos o de cada uno de ellos el pago de la correspondiente indemnización, y para el efecto cuenta entonces con varios patrimonios para hacerla efectiva, de acuerdo con lo que más convenga a sus intereses. Vistas las cosas desde esa perspectiva hay que entender que la acción que finalmente instaura la víctima en orden a recabar la indemnización respecto de apenas uno de los responsables, constituye una actuación independiente, que, justamente por ser así, en tesis general, no da lugar a que se comunique la respectiva definición judicial en relación con los demás sujetos que son civilmente responsables que no han sido demandados o que lo son en otro proceso; salvo, claro está, en lo que sea para evitar que haya un doble o múltiple pago de la indemnización” (Sentencia de casación civil No. 075 de 10 de septiembre de 1998)

Significa lo anterior que queda al talante de la víctima demandar a cada una de las personas naturales o jurídicas civilmente responsables, sólo una o todas ellas simultáneamente, por virtud de la comentada solidaridad legal; y que, por ende, sea lo que hiciere, respecto de cada una el ejercicio de la acción es autónomo e independiente, aún en el evento de que se involucren en la misma demanda por efectos del litisconsorcio voluntario por pasiva que eventualmente se integraría entre las mismas”.

² CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente: SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO 7 de Septiembre de 2001 Exp. 6171

Luego, a pesar del litisconsorcio facultativo del cual no existe duda, lo cierto es que, entre los accionados surge solidaridad legal que permite solicitar medidas cautelares contra alguno o alguno de ellos, sin que exista norma legal que debe serlo contra todos los obligados solidarios.

Lo anterior, para significar que a pesar del esfuerzo argumentativo del *a quo* en punto a esta clase de litisconsorcio, lo que se pone de presente es si ello obliga, se repite a solicitar medidas cautelares frente a todos ellos.

No es de difícil ocurrencia que un pasajero lesionado en accidente de tránsito demande en acción de responsabilidad civil contractual a la empresa afiliadora y en acción directa a la compañía aseguradora con fundamento en la póliza de responsabilidad civil contractual, pero al mismo tiempo, el ejercicio de la acción de responsabilidad extracontractual en contra el propietario conductor, empresa afiliadora y compañía de seguros del otro vehículo involucrado en el accidente. Según la tesis que pregonan el *a quo*, está obligado el demandado a solicitar medidas cautelares frente a todos ellos, so pena de inadmisión de la demanda y eventual rechazo por falta del requisito de procedibilidad, lo que constituye, como lo hizo el juez, interpretación que lesiona el principio *pro actione*, esto es, obstaculiza de manera injustificada el derecho de los actores a que la jurisdicción ordinaria conozca y resuelva sobre las pretensiones a ella sometidas

8. De otro lado, y en lo que tiene que ver con el resto de las exigencias, consideró el juez que la pretensora no suplió las

falencias requeridas, pues en su concepto omitió delimitar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos que dieron base a la acción indemnizatoria y, que tampoco complementó la fuente de los ingresos percibidos por la víctima directa.

El apoderado de la parte actora consideró que cumplía a cabalidad con tal requisitoria pues dijo que en la demanda se expresó con claridad los supuestos fácticos que fundamentan la demanda, en la forma prevista en el artículo 82 del Código General del Proceso.

Y en relación con la fuente de ingresos de la víctima directa John Jairo Maya Salazar, adujo que en el hecho 8 de la demanda se señaló que su oficio era vendedor y que generaba ingresos equivalentes a un salario mínimo

9. De la revisión efectuada al escrito introductor se extrae que los supuestos fácticos permiten inferir lo sucedido en el accidente de tránsito ocurrido y que originó la presente demanda, y siendo así es al juez quien en aras de salvaguardar los derechos de las partes y de otorgar prevalencia del derecho sustancial, como lo pregona la Corte Suprema de Justicia en múltiples providencias, debió acudir a su facultad interpretativa de los segmentos del texto, en conjunto, de manera lógica y racional. Interpretar el *petitum* y la *causa petendi*, dice la rectora de la jurisdicción ordinaria, para extraer la verdadera intención de los demandantes. Esa labor, racional, sistemática e íntegra del escrito inicial, agrega el Tribunal, se extiende también a los anexos que se allegan con este.

Ello sin pasar por alto que las exigencias tan específicas que pidió el juez de instancia, que debían contener los hechos de la demanda, tales como “*por ejemplo: Condiciones climáticas, visibilidad u obstáculos que la nubaran o redujeran, estado de la vía, sentido en que se movilizaba el vehículo y el transeúnte, lugar del impacto, si sobre la vía, sobre la berma, sobre la acera, estado del conductor, velocidad del desplazamiento, etc, etc...*” harán parte del debate probatorio, y de ninguna manera el hecho de no describirse en la narración fáctica constituyen inadmisión, y peor aún, rechazo de la demanda.

9. Vistas así las cosas, se tiene que proceder de la forma como lo hizo el *a quo*, es olvidar la esencia de los procedimientos, pero además, claro ejemplo del adagio latino “*summus jus, summa injuria*”, pues de esa manera se lesionó el derecho de acceso a la administración de justicia de los demandantes, se itera, el respeto por las formas propias de cada juicio no implica, en manera alguna que los ritos procesales sean un fin en sí mismos, todo lo contrario, la primacía de lo sustancial, impone que los procedimientos sirvan como medio para lograr la efectividad de la administración de justicia y de los derechos subjetivos de quienes someten sus conflictos a ella.

No se trata de avalar el desconocimiento absoluto de la ritualidad procesal, pero tampoco de que el funcionario judicial atienda de manera tan rigurosa a esas formalidades, pues ello apareja un «*excesivo ritual manifiesto*» que sacrifica prerrogativas constitucionales para salvaguardar la forma.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto el Tribunal Superior de Medellín en Sala Unitaria Civil de Decisión, REVOCA el proveído objeto de apelación por las razones que fueron expuestas en la parte motiva de esta providencia y en su lugar dispone, que la quo proceda a proferir el auto respectivo haciendo abstracción de los argumentos contenidos en el auto recurrido, y continúe el trámite pertinente (admisión, fijación de la caución, decreto de la medida solicitada, etc.) de ser procedente.

NOTIFIQUESE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Magistrado

Firmado Por:

Juan Carlos Sosa Londono
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 001 Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

27b178655f0a51acea45732ec4ad7c67689d451cfdbb31b4cae7d
be843d85fc2

Documento generado en 14/10/2021 09:00:44 a. m.

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>